Estado de Alarma: Plazos, procedimientos y aplazamientos en el ámbito tributario

Adrián Boix Cortés
Rosario Cuadra Espinar

Abogados de Gómez-Acebo & Pombo

Diego Martín-Abril y Calvo

Of counsel de Gómez-Acebo & Pombo

El sábado 14 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, entrando en vigor, ese mismo día. En dicho Real Decreto se contienen medidas en relación con el cómputo de los plazos procesales y administrativos, que tienen especial incidencia en el ámbito tributario. Por su parte, el viernes 13 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, aprobado por el Consejo de Ministros, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas tributarias, relativas a plazos y aplazamientos, para paliar los efectos derivados del COVID-19, concretamente:

1. El RD 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, y la suspensión de plazos en el orden tributario.

El RD 463/2020 contiene importantes medidas en relación con el cómputo de los plazos procesales y administrativos, que pueden tener incidencia en el ámbito tributario:

- i) «Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales. 1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.»

Si bien la primera parte de la referida DA 1ª podría admitir distintas interpretaciones respecto a los efectos en el cómputo de los plazos procesales, la expresión «se reanuda» consideramos que sólo admite una interpretación posible, y es, con las debidas cautelas, que a priori el cómputo de los plazos procesales se suspende desde el 14 de marzo de 2020, durante el plazo de 15 días naturales. En caso de prorrogarse el estado de alarma dicha paralización del cómputo del plazo continuará hasta que cese dicho estado de alarma.

Se excepcionan de la antedicha medida distintos plazos procesales. Entre ellos, el único con eventual incidencia tributaria es el relativo al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales (art.114 LJCA), y las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la LJCA, relativas a las órdenes de entrada y registro domiciliario.

- ii) «Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. 1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanuda en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.»

La norma se refiere en este punto a «los plazos para la tramitación de los procedimientos», por lo que dicho precepto debe entenderse referido, en exclusiva, a la tramitación de los procedimientos administrativos. No guarda relación dicha DA 3ª con la prescripción de derechos o acciones.

De nuevo, se prevé la reanudación de los procedimientos administrativos, lo que implica que el cómputo de duración de los mismos queda detenido hasta la conclusión del estado de alarma, a priori, 15 días naturales.

En este caso, se prevé que el órgano competente pueda acordar motivadamente medidas de ordenación e instrucción del procedimiento, las estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado. Ahora bien, ello está condicionado a que el interesado manifieste su conformidad con tales actuaciones, o bien a que directamente manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. Bajo este último inciso cabría la posibilidad de que los interesados manifiesten su conformidad a la continuación de los procedimientos administrativos en curso, evitando que se dilate su conclusión.

Lo indicado anteriormente no afecta a los procedimientos administrativos referidos a situaciones vinculadas a hechos justificativos del estado de alarma.

- iii) «Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.»

Determina ello que cualquier acción o derecho sometido a plazo de prescripción o caducidad, queda suspendido, debiéndose entender que se reanudará dicho plazo de prescripción o de caducidad cuando finalicen los efectos del estado de alarma.

En resumen, con los matices indicados:

Los plazos ante los órganos jurisdiccionales han quedado suspendidos hasta la conclusión del estado de alarma.

Los plazos para la tramitación y conclusión de los procedimientos administrativos han sido también suspendidos hasta la conclusión del estado de alarma. No obstante, parece que podría admitirse la posibilidad de manifestar la conformidad con que dicha tramitación continúe, a petición del contribuyente o a instancia del órgano competente.

Los plazos de prescripción o de caducidad en el ejercicio de acciones o de derechos, por ejemplo, la prescripción (de cuatro años) del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación por parte de la Administración o la prescripción (de cuatro años) del derecho a instar la devolución de ingresos indebidos, han quedado suspendidos y se reanudarán con la conclusión del estado de alarma.

Los períodos de presentación de autoliquidaciones o declaraciones-liquidaciones tributarias no constituyen un plazo procesal, ni puede concluirse inequívocamente que formen parte de un procedimiento administrativo, ni forman parte de un plazo de prescripción o de caducidad, aunque su existencia se encuentre estrechamente vinculada con el inicio de determinados plazos de prescripción. Por dicho motivo, en tanto en cuanto no se aclare por el Ministerio de Hacienda el alcance del estado de alarma sobre dichos plazos, la recomendación es la de seguir cumpliendo con todos los plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones.

En la fecha de cierre de esta Nota, la AEAT informa en su web del cierre de sus oficinas debido al estado de alarma y, considerando la suspensión de plazos administrativos decretada, indica expresamente que *«se está tramitando una norma legal tributaria con la ampliación de los plazos para realizar trámites.»*¹.

2. Posibilidad de aplazar las deudas tributarias, en virtud de lo aprobado por el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.

El Real Decreto-ley 7/2020, introduce una serie de medidas urgentes, primordialmente, en materia sanitaria. No obstante, se adoptan también determinadas medidas adicionales para paliar el impacto económico que pueda derivarse del COVID-19, sobre determinadas empresas

¹ https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Cierre_de_Oficinas_para_atencion_presencial.shtml

y sectores, así como sobre los ciudadanos. Así, se prevé la posibilidad de solicitar el aplazamiento, hasta 30.000 euros, sin necesidad de aportar garantía, de la mayor parte de las deudas tributarias, dentro del ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado. En este sentido, la norma aclara que este aplazamiento también será aplicable a las deudas tributarias relativas a (i) la práctica de retenciones o ingresos a cuenta; (ii) los impuestos que deban ser repercutidos (en especial, el IVA); y (iii) los pagos fraccionados que debieran ser realizados en el marco del Impuesto sobre Sociedades. Cabe recordar que estas deudas, hasta ahora, eran inaplazables.

Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley (13 de marzo de 2020) y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

Para poder otorgar estos aplazamientos, se requiere que el deudor tributario haya tenido en el ejercicio 2019 un volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04 euros.

Estos aplazamientos tendrán un plazo máximo de duración de seis meses y no se devengarán intereses de demora durante los tres primeros meses.

En cuanto a la forma de solicitarlos, en la página web de la AEAT se recogen unas instrucciones al efecto².

² https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py__de_12_de_marzo.sht